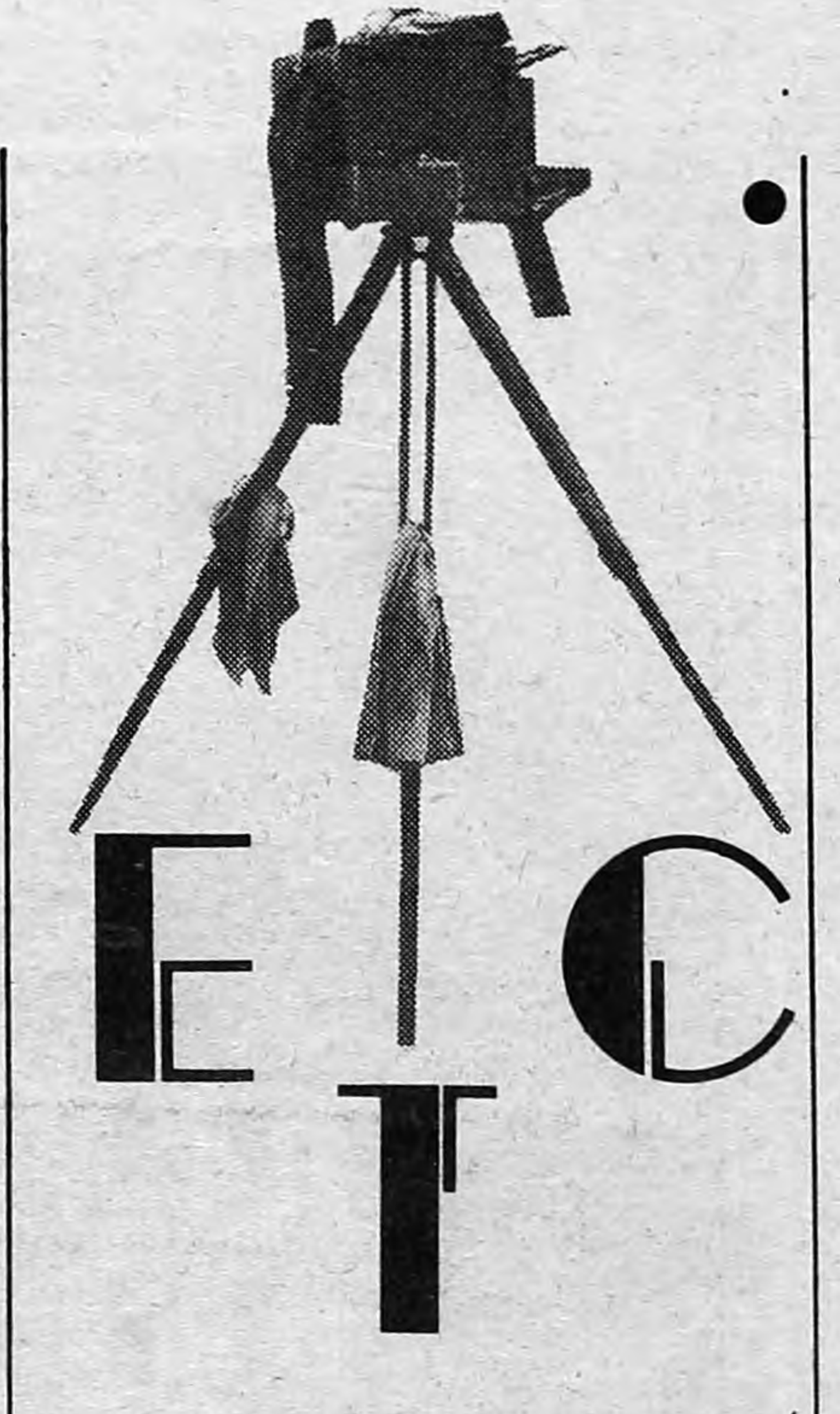


INSTANTANEA DEL URUGUAY



Poco queda en Uruguay de la euforia que caracterizó la llegada de la democracia. Pese a que los índices económicos experimentaron una leve mejoría, el crecimiento no se traduce en una disminución de la miseria. Los militares acusados de delitos económicos y de violar los derechos humanos no fueron juzgados, y un escándalo sacude ahora la revisión de las firmas reunidas para lograr la realización de un referéndum, donde la población podría decidir la anulación de la ley que permitió la impunidad.

Por Ricardo Moreno, El País, Recientemente en Montevideo

Recorrer Uruguay después de 15 años de ausencia permite calibrar en toda su hondura la magnitud de la tarea destructiva llevada a cabo por 12 años de dictadura militar. Aunque el deterioro general tiene antecedentes más lejanos, los militares le imprimieron tal aceleración que el resultado ha sido otro país apenas reconocible.

La otrora ''ínsula europea'' ha caminado gradual pero firmemente hacia la latinoamericanización, sin que la extendida clase media que sustentó una de las más arraigadas sociedades democráticas del continente haya adquirido plena conciencia de ello. Esto determina un dramático desajuste entre el país real y la añoranza de lo que fue y ya no es.

De la euforia colectiva existente cuando el retiro de los militares, que en buena parte respondía a una necesidad íntima de compensar el ''tiempo del desprecio'' de los años de la dictadura, poco o nada queda luego de tres años de gobierno democrático. La realidad se ha encargado de ir desmontando la ilusión de que el advenimiento de la democracia significaba al mismo tiempo el de una nueva etapa histórica en un país distinto, porque tantas cosas no pasan en vano, con los rasgos de humanismo, justicia y convivencia que había tenido.

Un sentimiento de frustración y de tristeza ha ocupado el lugar de la esperanza, impregnando el alma colectiva, con excepción, claro está, de los portavoces gubernamentales y de la minoría de los que, en la crisis o en la prosperidad, en la dictadura o en la democracia, se las ingenian siempre para salvaguardar o aun acrecentar sus privilegios. Nadie esperaba milagros del gobierno civil que heredó un país saqueado en medio de la prolongada coyuntura internacional desfavorable. Se esperaba, nada más y nada menos, que junto con la restauración de las libertades democráticas se pusiera en marcha, dentro de los límites posibles, un proyecto nacional en el que la justicia dejara de ser un recuerdo nostálgico de los uruguayos. Empresa difícil sin duda, pero a la que todos o casi todos estaban dispuestos a respaldar. No ocurrió



Una imagen que se niega a pasar al olvido frente al Parlamento uruguayo, en pleno centro de Montevideo.

así, y ello, junto con la presencia vigilante de las fuerzas armadas a la sombra del gobierno constitucional, establece, si no a corto plazo, la amenaza potencial más concreta para el futuro de esta joven democracia.

Saqueo y entrega

Si graves fueron las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares, por las cuales la sociedad uruguaya intenta ahora juzgarlos con las garantías que ellos nunca dispensaron a los vencidos, mediante un plebiscito, llama la atención que no se les hayan exigido responsabilidades por el saqueo y la entrega de la economía del país. Cuando asaltaron el poder en 1973, la deuda externa no alcanzaba a los 800 millones de dólares. Cuando lo dejaron, llegaba casi a los 5000 millones. Las únicas obras visibles que quedaron fueron algunos mamarrachescos monumentos de exaltación de valores patrióticos que no habían sabido preservar.

Por lo demás, pocas cosas quedaron funcionando en el país. Hablar por teléfono, aun dentro de la ciudad de Montevideo, exige tiempo y paciencia hasta lograr que el número marcado corresponda con el interlocutor buscado, que la conversación sea audible y no compartida por otros que están intentando también comunicarse. El director de Correos, que en un rapto de sinceridad declaró en una entrevista que el servicio postal no funcionaba mejor que en Africa, fue relevado del cargo por el gobierno civil.

Es cierto que en el negocio de la deuda externa fueron grupos civiles, la "rosca financiera", los principales beneficiarios. Los militares, ineptos para gobernar, más aún el mundo de las finanzas, fueron los ejecutores y seguramente los socios menores en las ganancias de una política que diseñaron otros. Pero muchos generales y oficiales que en este país provenían de la clase media y vivían holgada pero modestamente, de acuerdo al estilo predominante, emergieron de sus años de "sacrificio por la patria" dueños de estancias y de costosas residencias privadas. No se ha investigado la posibilidad de que también posean su parte en las millonarias cuentas bancarias en el exterior.

Como institución, las Fuerzas Armadas no tienen actualmente, si se exceptúa al ex comandante en jefe, general Hugo Medina, que ocupa la cartera de Defensa en el gobierno civil, una presencia ostensible en la sociedad, que si antes los menospreciaba ahora los desprecia. Pero muchos de sus actos arbitrarios no sólo quedaron sin sanción, sino que han sido tácitamente convalidados por el actual gobierno.

Escenas de campo

Un recorrido por el interior de Uruguay, donde sólo van quedando rebaños de ganado vacuno o lanar y apenas testimonios de la presencia de hombres trabajando, permite ver modernas construcciones para uso militar o policial, en tanto las escuelas rurales funcionan en inhóspitos locales carentes de las condiciones mínimas. Los hospitales Militar y Policial de Montevideo son los mejores equipados del país y se los ve en proceso de modernización y ampliación, mientras que en los de Salud Pública el deterioro alcanza niveles impactantes.

Frecuentemente pueden leerse en la prensa cartas del cuerpo médico dirigidas a las autoridades denunciando la imposibilidad de seguir practicando un remedo de medicina en tales condiciones. Naturalmente quedan sin respuesta, y como el médico tiene que sobrevivir y no puede prescindir de uno de sus varios trabajos, termina por resignarse y aceptar una situación que violenta toda ética.

Cuando los militares se retiraron del gobierno, abandonaron el Hospital de Clínicas, que siempre estuvo administrado y atendido por la Universidad de la República, a través de la Facultad de Medicina y era uno de los mejor equipados. Antes de irse se llevaron todos los equipos que pudieron, y cuando no lo hicieron, los dañaron deliberadamente.

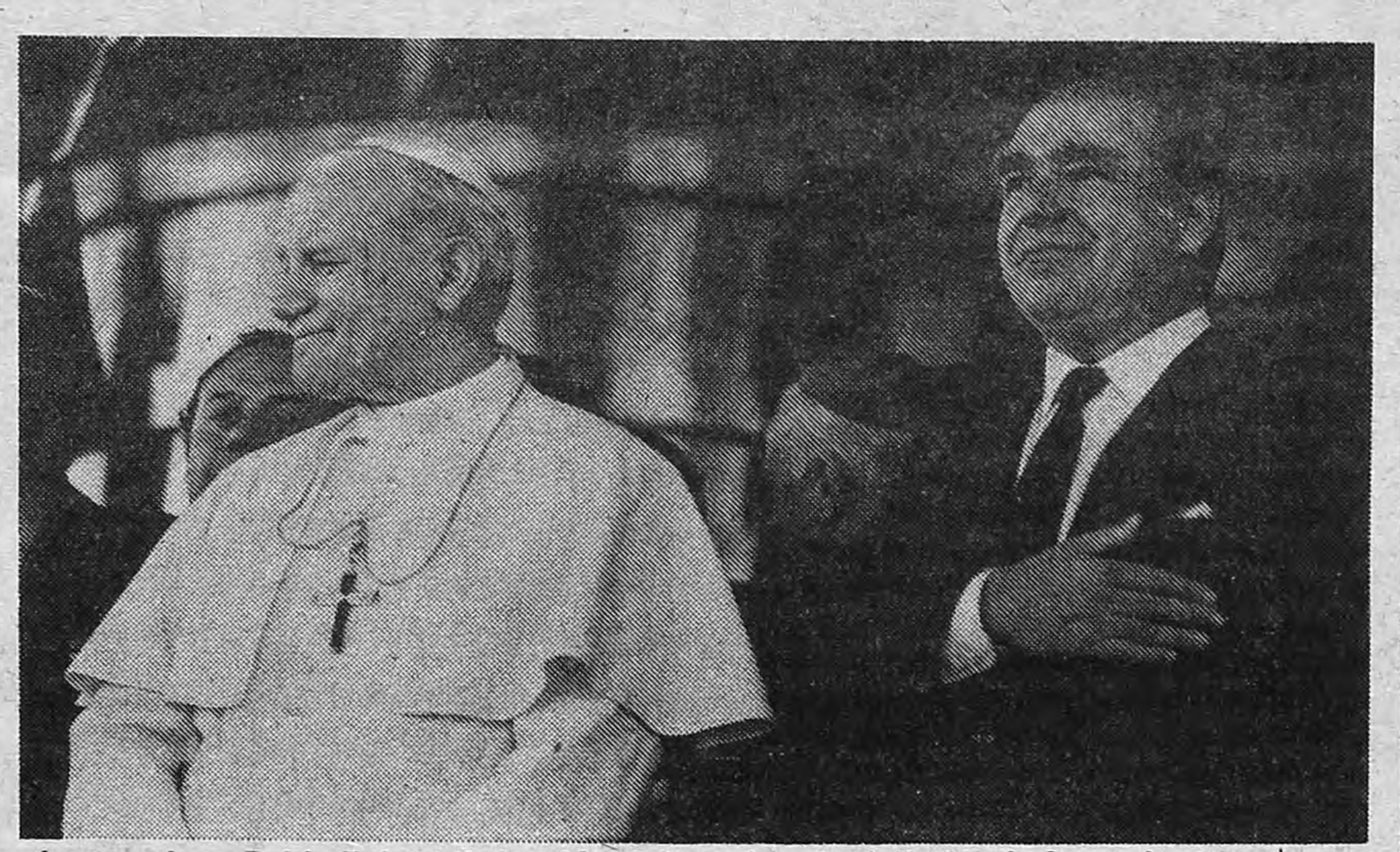
La presencia militar en la vida uruguaya tiene sus expresiones políticas en las ambiguas respuestas del general Hugo Medina, ministro de Defensa, sobre la actitud de sus subordinados ante un eventual rechazo de la ley de impunidad en el plebiscito, que tendrá lugar, probablemente, este año. Los pronunciamientos de integrantes de la oficialidad en la revista del centro militar *El Soldado*, órgano de difusión restringido al ámbito castrense, son también una clara muestra del poder militar.

Frustración y desesperanza

El gobierno democrático del presidente Julio María Sanguinetti, que asumió al pod[...] en marzo de 1985, contabiliza en su favor a[...] gunos éxitos en materia económica: redu[...] ción de la inflación y del déficit fisca[...] aumento de las exportaciones, reducción d[...] gasto público y un leve descenso del núm[...] ro de desocupados, que los economistas d[...] gobierno y de la oposición evalúan de dif[...] rente manera. En cualquier caso, otra es [...] situación en el campo político, en cuyo an[...] lisis coinciden desde vertientes tan distint[...] como son la izquierda y los obispos urugu[...] yos: el país se encuentra sumido en la fru[...] tración y la desesperanza.

Mientras el gobierno afirma que el desp[...] gue económico se debe a su política intern[...] la oposición considera que se debe a circun[...] tancias que derivan de la situación intern[...] cional, como la reducción de los precios d[...] petróleo, que supone cerca del 30 por cien[...] de las importaciones del país, el descenso d[...] las tasas internacionales de interés, la de[...] valorización del dólar y la repercusión pos[...] tiva en el comienzo de los planes "Cruzado[...] en Brasil, y "Austral", en la Argentina.

Aun cuando esos factores no fueran co[...] yunturales y el crecimiento económico [...] mantuviera, la realidad indica que en Ur[...] guay ese crecimiento no se ha traducido e[...]



Junto a Juan Pablo II, la satisfacción del presidente Julio María Sanguinetti.

Las [...]

Dos generaciones de estudiantes [...] guayos pasaron por los distintos [...] clos durante los años de la dicta[...] ra militar en uruguay y sufriero[...] daño considerable infligido por los milit[...] a la formación educacional. La primera [...] rea consistió en desmantelar los cuadros [...] centes, que, en términos generales, ten[...] una buena preparación y habían accedid[...] sus cargos mediante pruebas de oposic[...] Los sustituyeron por quienes tenían co[...] únicos méritos una militancia antidemo[...] tica y una probada obsecuencia al poder [...] perante.

Modificaron programas de estudio con s[...] oscurantista retrospectiva, eliminando [...] la historia acontecimientos fundament[...] por no ser del agrado de las concepciones [...] los militares. Las revoluciones francesa o [...] sa y el marxismo dejaron de existir. Pr[...]



Una imagen que se niega a pasar al olvido frente al Parlamento uruguayo, en pleno centro de Montevideo.

así, y ello, junto con la presencia vigilante de las fuerzas armadas a la sombra del gobierno constitucional, establece, si no a corto plazo, la amenaza potencial más concreta para el futuro de esta joven democracia.

Saqueo y entrega

Si graves fueron las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares, por las cuales la sociedad uruguaya intenta ahora juzgarlos con las garantías que ellos nunca dispensaron a los vencidos, mediante un plebiscito, llama la atención que no se les hayan exigido responsabilidades por el saqueo y la entrega de la economía del país. Cuando asaltaron el poder en 1973, la deuda externa no alcanzaba a los 800 millones de dólares. Cuando lo dejaron, llegaba casi a los 5000 millones. Las únicas obras visibles que quedaron fueron algunos mamarrachescos monumentos de exaltación de valores patrióticos que no habían sabido preservar.

Por lo demás, pocas cosas quedaron funcionando en el país. Hablar por teléfono, aun dentro de la ciudad de Montevideo, exige tiempo y paciencia hasta lograr que el número marcado corresponda con el interlocutor buscado, que la conversación sea audible y no compartida por otros que están intentando también comunicarse. El director de Correos, que en un rapto de sinceridad declaró en una entrevista que el servicio postal no funcionaba mejor que en Africa, fue relevado del cargo por el gobierno civil.

Es cierto que en el negocio de la deuda externa fueron grupos civiles, la "rosca financiera", los principales beneficiarios. Los militares, ineptos para gobernar, más aún el mundo de las finanzas, fueron los ejecutores y seguramente los socios menores en las ganancias de una política que diseñaron otros. Pero muchos generales y oficiales que en este país provenían de la clase media y vivían holgada pero modestamente, de acuerdo al estilo predominante, emergieron de sus años de "sacrificio por la patria" dueños de estancias y de costosas residencias privadas. No se ha investigado la posibilidad de que también posean su parte en las millonarias cuentas bancarias en el exterior.

Como institución, las Fuerzas Armadas no tienen actualmente, si se exceptúa al ex comandante en jefe, general Hugo Medina, que ocupa la cartera de Defensa en el gobierno civil, una presencia ostensible en la sociedad, que si antes los menospreciaba ahora los desprecia. Pero muchos de sus actos arbitrarios no sólo quedaron sin sanción, sino que han sido tácitamente convalidados por el actual gobierno.

Escenas de campo

Un recorrido por el interior de Uruguay, donde sólo van quedando rebaños de ganado vacuno o lanar y apenas testimonios de la presencia de hombres trabajando, permite ver modernas construcciones para uso militar o policial, en tanto las escuelas rurales funcionan en inhóspitos locales carentes de las condiciones mínimas. Los hospitales Militar y Policial de Montevideo son los mejores equipados del país y se los ve en proceso de modernización y ampliación, mientras que en los de Salud Pública el deterioro alcanza niveles impactantes.

Frecuentemente pueden leerse en la prensa cartas del cuerpo médico dirigidas a las autoridades denunciando la imposibilidad de seguir practicando un remedo de medicina en tales condiciones. Naturalmente quedan sin respuesta, y como el médico tiene que sobrevivir y no puede prescindir de uno de sus varios trabajos, termina por resignarse y aceptar una situación que violenta toda ética.

Cuando los militares se retiraron del gobierno, abandonaron el Hospital de Clínicas, que siempre estuvo administrado y atendido por la Universidad de la República, a través de la Facultad de Medicina y era uno de los mejor equipados. Antes de irse se llevaron todos los equipos que pudieron, y cuando no lo hicieron, los dañaron deliberadamente.

La presencia militar en la vida uruguaya tiene sus expresiones políticas en las ambiguas respuestas del general Hugo Medina, ministro de Defensa, sobre la actitud de sus subordinados ante un eventual rechazo de la ley de impunidad en el plebiscito, que tendrá lugar, probablemente, este año. Los pronunciamientos de integrantes de la oficialidad en la revista del centro militar *El Soldado*, órgano de difusión restringido al ámbito castrense, son también una clara muestra del poder militar.

Frustración y desesperanza

El gobierno democrático del presidente Julio María Sanguinetti, que asumió al poder en marzo de 1985, contabiliza en su favor algunos éxitos en materia económica: reducción de la inflación y del déficit fiscal, aumento de las exportaciones, reducción del gasto público y un leve descenso del número de desocupados, que los economistas del gobierno y de la oposición evalúan de diferente manera. En cualquier caso, otra es la situación en el campo político, en cuyo análisis coinciden desde vertientes tan distintas como son la izquierda y los obispos uruguayos: el país se encuentra sumido en la frustración y la desesperanza.

Mientras el gobierno afirma que el despegue económico se debe a su política interna, la oposición considera que se debe a circunstancias que derivan de la situación internacional, como la reducción de los precios del petróleo, que supone cerca del 30 por ciento de las importaciones del país, el descenso de las tasas internacionales de interés, la desvalorización del dólar y la repercusión positiva en el comienzo de los planes "Cruzado" en Brasil, y "Austral", en la Argentina.

Aun cuando esos factores no fueran coyunturales y el crecimiento económico se mantuviera, la realidad indica que en Uruguay ese crecimiento no se ha traducido en una disminución de la miseria.

Pocos días antes de la polémica visita del papa Juan Pablo II a Uruguay el pasado mes de mayo, la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) dio a conocer con el título "La Iglesia y los derechos humanos" una "reflexión pastoral sobre la situación actual" muy elocuente. "Si bien los uruguayos nos sentimos felices de haber recobrado la normalidad institucional —dicen los obispos— la realidad que estamos viviendo nos dice que faltan todavía otros pasos para alcanzar la plenitud de una democracia auténtica. Sin una renovación de las actitudes y los criterios que rigen la acción política y social y sin los cambios de ciertas estructuras inconciliables con la justicia distributiva, la sola libertad electoral es insuficiente para sostener un orden de convivencia que evite las frustraciones y los conflictos permanentes."

Los obispos analizan la situación de esta manera: "Sin duda las situaciones que violan los derechos humanos no son fruto del azar. Provienen de la conducta de las personas que las provocan, las admiten o no las corrigen. Una sociedad que mira sin inquietarse el espectáculo de muchos hermanos abandonados a la vera del camino, demuestra una dureza de corazón inconciliable con el amor al prójimo exigido por la ley de Dios".

Los obispos uruguayos no están solos en sus críticas. El líder de la coalición de izquierda Frente Amplio, Liber Seregni, que ha mantenido, no sin cierto malestar de las bases, una actitud de gran tolerancia hacia el gobierno, señaló el pasado 19 de abril en un mitin multitudinario: "El gobierno del Partido Colorado, y la gobernabilidad acordada por el Partido Nacional han seguido la tendencia conservadora preconizada en el extranjero, también obedecida por otros gobiernos latinoamericanos. Se trata de una política antinacional, antipopular y antidemocrática".

Más adelante se refiere a "la no resolución de los problemas de nuestra juventud, sin horizontes ni esperanzas, condenada a la emigración o a la frustración".

Desde vertientes tan distintas como son la Iglesia y una coalición de partidos de centro-izquierda se emplean casi las mismas palabras, frustración, desesperanza, para tipificar un estado colectivo de conciencia.

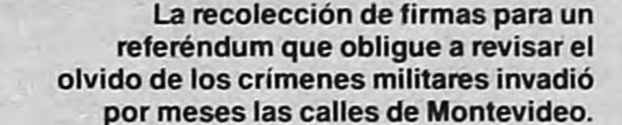
El gobierno democrático, que ha demostrado ser poco receptivo a las críticas, reaccionó con acritud por intermedio de alguno de los medios que le apoyan, calificando a los obispos de pesimistas y cuestionando entre líneas su derecho a pronunciarse sobre estos temas. El discurso de Seregni, por su parte, levantó una tormenta política desde los aledaños del poder donde parece haberse entendido mal que convivencia política no significa anulación de la crítica ni del derecho a la oposición.

Peligroso malentendido porque tiende, y ya lo ha hecho, a atribuir a quienes disienten la intención de desestabilizar la democracia y querer volver a un pasado de violencia que nadie desea.

Seguramente el argumento volverá a ser utilizado cuando la resignación actual dé paso, inevitablemente, a la protesta. En el Uruguay la única violencia visible hasta ahora es la de la marginación en la miseria de tantos seres humanos. Esa parece ser la gran desestabilizadora de la democracia uruguaya y también de las otras nuevas democracias del continente. Y esto hay que decirlo sobre todo en la Europa donde suele identificarse elecciones y ausencia de atropellos a los derechos humanos con la vigencia de la democracia. Quizás sea esta manida palabra la que esté necesitando de una puesta a punto.



Junto a Juan Pablo II, la satisfacción del presidente Julio María Sanguinetti.



La recolección de firmas para un referéndum que obligue a revisar el olvido de los crímenes militares invadió por meses las calles de Montevideo.

DEBATE EN TORNO AL REFERENDUM

LA GUERRA DE LAS FIRMAS

Por Diana Cardozo

El aparato de televisión muestra dos firmas: la rúbrica del actual presidente del Uruguay, y otra, dieciséis años más vieja, del entonces ministro de Educación, Julio María Sanguinetti. Son sensiblemente diferentes. Seguidamente alguien sentencia: "Si el presidente quisiera firmar por el referéndum, la Corte Electoral no respetaría su voluntad ciudadana". La escena que dura 30 segundos plantea la inquietud primordial de los uruguayos en la actual coyuntura, según lo indican los sondeos de opinión pública. Tras diez meses de un lento trabajo de la Corte Electoral —encargada del conteo y la fiscalización de las firmas recogidas— para derogar la ley de amnistía que ampara a los militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura, se conoció la novedad de que por lo menos 30 mil fueron anuladas sin la presencia de los delegados de la Comisión Pro Referéndum, trámite violatorio del reglamento de la Corte. Se agrega a ello que otras 18 mil habían quedado "congeladas" con antelación, las que si al final del conteo fueran necesarias, se convocará a cada ciudadano firmante para que rectifique su adhesión frente a la Corte. Las cifras que se manejan oficialmente son las antes mencionadas aunque un funcionario de la Corte dijo, hace pocos días, que se habían constatado irregularidades en unas 150 mil firmas, lo que haría muy difícil viabilizar el trámite de ratificación. Pese a que los organizadores de la consulta presentaron 654.702 firmas, 100 mil más que las exigidas por la Constitución para llamar al referéndum, la política seguida por la Corte hasta el momento podría incluso hacer naufragar la posibilidad de que haya referéndum. Día a día el escándalo toma mayores proporciones, cuando se filtra información de que han sido desechadas firmas de legisladores públicamente adherentes a la consulta e incluso de miembros de la Comisión nacional que la organiza. Desde la oposición parten airadas acusaciones en el sentido de que la Corte es "manejada por el gobierno para impedir el referéndum" y se menciona con preocupación la dramática disminución de las firmas reconocidas como válidas. En el lento y polémico trámite, el organismo dependiente del Poder Judicial —con mayoría de miembros representantes del gobierno— ha descartado por diferencias mínimas en el tamaño de una letra, el largo de la barra de una "t" o el punto de la "i", miles de adhesiones. La firma de un ciudadano de 80 años para ser aceptada, tendrá que ser idéntica a la de sus 18, cuando sacó la credencial cívica con la que se la compara. "Se está violando la voluntad popular, basta de manejos, a votar", fue la consigna de una caravana multitudinaria que recorrió Montevideo el sábado 24, exigiendo la realización del referéndum. Como verdad de Perogrullo en el Uruguay se suele decir que allí una muerte vale, y que sobre las víctimas no se puede pasar arrancando las hojas del almanaque.

Fue así como bajo el liderazgo de las viudas de los legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz —ambos asesinados en Buenos Aires— se plegó buena parte del espectro político del país: el Frente Amplio, el Movimiento de Rocha del Partido Nacional, la Unión Blanca Popular, el Movimiento de Reafirmación Batllista (colorado), el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y otras agrupaciones de izquierda que están fuera de la coalición frenteamplista. Apoyaron asimismo la convocatoria la cental única de trabajadores PIT-CNT y múltiples organizaciones sociales que van desde las cooperativas de viviendas y organizaciones barriales, hasta el pronunciamiento a favor de la cúpula religiosa empujada por el pronunciamiento de sus bases.

La maratónica campaña para conseguir las firmas contó con el apoyo de figuras tan reconocibles como el actor cómico Ricardo Espalter, escritores como Eduardo Galeano o Mario Benedetti, los músicos Alfredo Zitarrosa o Daniel Viglietti o los goleadores de fútbol Fernando Morena y Enzo Francescoli quienes entre muchísimos otros, desfilaron frente a las cámaras o puerta a puerta reclamando una firma por la justicia. A esta altura, sin embargo, ya es evidente que el cotejo de las firmas con las hojas electorales no podrá completarse este año como estaba previsto. Quedará entonces para dirimirse en el año electoral como abiertamente lo había proclamado el gobierno a través de sus funcionarios. La simultaneidad del voto del referéndum con las elecciones presidenciales sería una estrategia viable para volver al redil a miles de ciudadanos de los partidos tradicionales, que contra la opinión de sus líderes han firmado por el referéndum. El voto simultáneo —conjeturan— volvería a "disciplinar" a las bases que en cuestión de política de derechos humanos optaron por despegarse del encuadre partidario.

En el camino quedan aún complejas instancias a dirimirse como las sanciones impuestas por el ministro de Defensa a los militares que adhirieron a la consulta. El general (R) Hugo Medina —ex integrante de la dictadura—, además de adelantar públicamente que las fuerzas armadas pueden llegar a desconocer el veredicto popular, ha sancionado y abierto sumarios a los militares y policías que firmaron por el referéndum. Por otra parte, una veintena de legisladores discuten la posibilidad de iniciar un juicio político a la Corte por la parcialidad demostrada, y pende el riesgo de que la Comisión desconozca su fallo. El equilibrio de los tres poderes aparece lesionado con una corte electoral bajo las sombras de la sospecha.

Si el referéndum se hiciera en noviembre próximo junto a las elecciones nacionales, pesará sobre el mismo la gravitación de un doble plazo. Para los militares será posiblemente la anulación de la ley de impunidad, que pomposamente fue bautizada con el nombre de Ley de Caducidad de la Petención Punitiva del Estado, defendida a rajatabla por el Partido Colorado; a su vez para éste será la terminación del período de gobierno con una deuda que deberá asumir el hombre que suceda a Sanguinetti en la casa de El Prado.

Las letras perdidas

Dos generaciones de estudiantes uruguayos pasaron por los distintos ciclos durante los años de la dictadura militar en uruguay y sufrieron el daño considerable infligido por los militares a la formación educacional. La primera tarea consistió en desmantelar los cuadros docentes, que, en términos generales, tenían una buena preparación y habían accedido a sus cargos mediante pruebas de oposición. Los sustituyeron por quienes tenían como únicos méritos una militancia antidemocrática y una probada obsecuencia al poder imperante.

Modificaron programas de estudio con saña oscurantista retrospectiva, eliminando de la historia acontecimientos fundamentales por no ser del agrado de las concepciones de los militares. Las revoluciones francesa o rusa y el marxismo dejaron de existir. Prohibieron autores nacionales o extranjeros. Todo su empeño docente estuvo centrado en implantar una disciplina militar en los liceos y escuelas; en cortar cabellos, ya que cortar cabezas de adolescentes no iba a ser bien visto por la comunidad internacional, y en prohibir a las jovencitas que usaran ropas que pudieran realzar sus atributos físicos.

Hoy se pueden medir las consecuencias de esta combinación de oscurantismo y deliberada intención de cortar a los jóvenes el cordón umbilical con la historia, la propia y la del mundo, como una forma de desconectarlos del futuro. Los profesores que retornaron a sus cargos después de la dictadura se encuentran con una ignorancia sorprendente, aun en alumnos de ciclos superiores. Autores nacionales o extranjeros conocidos internacionalmente, nada dicen a los actuales estudiantes. Desde un punto de vista cultural, és válido hablar de una generación perdida.

Adquirir un libro es prohibitivo para el uruguayo medio, y el servicio de bibliotecas públicas es prácticamente inexistente. Los diarios han pasado a ser un artículo de lujo en un país en el que pocas familias dejaban de recibirlo cada día y que tenía uno de los más altos índices de lectura del mundo. Ahora se compran sólo los domingos, y las tiradas de los de mayor circulación, que eran de unos 80.000 a 100.000 ejemplares, ya no llegan a 20.000. Una media docena de semanarios de diversas tendencias se publican con normalidad y tienen un público estable. El costo de un diario es actualmente de unos 300 pesos, pero el salario promedio está por debajo de 50.000 pesos, que es lo que cuesta el alquiler mensual de un modesto apartamento.

Domingo 2 de octubre de 1988

una disminución de la miseria.

Pocos días antes de la polémica visita del papa Juan Pablo II a Uruguay el pasado mes de mayo, la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) dio a conocer con el título "La Iglesia y los derechos humanos" una "reflexión pastoral sobre la situación actual" muy elocuente. "Si bien los uruguayos nos sentimos felices de haber recobrado la normalidad institucional —dicen los obispos— la realidad que estamos viviendo nos dice que faltan todavía otros pasos para alcanzar la plenitud de una democracia auténtica. Sin una renovación de las actitudes y los criterios que rigen la acción política y social y sin los cambios de ciertas estructuras inconciliables con la justicia distributiva, la sola libertad electoral es insuficiente para sostener un orden de convivencia que evite las frustraciones y los conflictos permanentes."

Los obispos analizan la situación de esta manera: "Sin duda las situaciones que violan los derechos humanos no son fruto del azar. Provienen de la conducta de las personas que las provocan, las admiten o no las corrigen. Una sociedad que mira sin inquietarse el espectáculo de muchos hermanos abandonados a la vera del camino, demuestra una dureza de corazón inconciliable con el amor al prójimo exigido por la ley de Dios".

Los obispos uruguayos no están solos en sus críticas. El líder de la coalición de izquierda Frente Amplio, Liber Seregni, que ha mantenido, no sin cierto malestar de las bases, una actitud de gran tolerancia hacia el gobierno, señaló el pasado 19 de abril en un mitin multitudinario: "El gobierno del Partido Colorado, y la gobernabilidad acordada por el Partido Nacional han seguido la tendencia conservadora preconizada en el extranjero, también obedecida por otros gobiernos latinoamericanos. Se trata de una política antinacional, antipopular y antidemocrática".

Más adelante se refiere a "la no resolución de los problemas de nuestra juventud, sin horizontes ni esperanzas, condenada a la emigración o a la frustración".

Desde vertientes tan distintas como son la Iglesia y una coalición de partidos de centroizquierda se emplean casi las mismas palabras, frustración, desesperanza, para tipificar un estado colectivo de conciencia.

El gobierno democrático, que ha demostrado ser poco receptivo a las críticas, reaccionó con acritud por intermedio de alguno de los medios que le apoyan, calificando a los obispos de pesimistas y cuestionando entre líneas su derecho a pronunciarse sobre estos temas. El discurso de Seregni, por su parte, levantó una tormenta política desde los aledaños del poder donde parece haberse entendido mal que convivencia política no significa anulación de la crítica ni del derecho a la oposición.

Peligroso malentendido porque tiende, y ya lo ha hecho, a atribuir a quienes disienten la intención de desestabilizar la democracia y querer volver a un pasado de violencia que nadie desea.

Seguramente el argumento volverá a ser utilizado cuando la resignación actual dé paso, inevitablemente, a la protesta. En el Uruguay la única violencia visible hasta ahora es la de la marginación en la miseria de tantos seres humanos. Esa parece ser la gran desestabilizadora de la democracia uruguaya y también de las otras nuevas democracias del continente. Y esto hay que decirlo sobre todo en la Europa donde suele identificarse elecciones y ausencia de atropellos a los derechos humanos con la vigencia de la democracia. Quizás sea esta manida palabra la que esté necesitando de una puesta a punto.

La recolección de firmas para un referéndum que obligue a revisar el olvido de los crímenes militares invadió por meses las calles de Montevideo.

DEBATE EN TORNO AL REFERENDUM

LA GUERRA DE LAS FIRMAS

Por Diana Cardozo

El aparato de televisión muestra dos firmas: la rúbrica del actual presidente del Uruguay, y otra, dieciséis años más vieja, del entonces ministro de Educación, Julio María Sanguinetti. Son sensiblemente diferentes. Seguidamente alguien sentencia: "Si el presidente quisiera firmar por el referéndum, la Corte Electoral no respetaría su voluntad ciudadana". La escena que dura 30 segundos plantea la inquietud primordial de los uruguayos en la actual coyuntura, según lo indican los sondeos de opinión pública. Tras diez meses de un lento trabajo de la Corte Electoral —encargada del conteo y la fiscalización de las firmas recogidas— para derogar la ley de amnistía que ampara a los militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura, se conoció la novedad de que por lo menos 30 mil fueron anuladas sin la presencia de los delegados de la Comisión Pro Referéndum, trámite violatorio del reglamento de la Corte. Se agrega a ello que otras 18 mil habían quedado "congeladas" con antelación, las que si al final del conteo fueran necesarias, se convocará a cada ciudadano firmante para que rectifique su adhesión frente a la Corte. Las cifras que se manejan oficialmente son las antes mencionadas aunque un funcionario de la Corte dijo, hace pocos días, que se habían constatado irregularidades en unas 150 mil firmas, lo que haría muy difícil viabilizar el trámite de ratificación. Pese a que los organizadores de la consulta presentaron 654.702 firmas, 100 mil más que las exigidas por la Constitución para llamar al referéndum, la política seguida por la Corte hasta el momento podría incluso hacer naufragar la posibilidad de que haya referéndum. Día a día el escándalo toma mayores proporciones, cuando se filtra información de que han sido desechadas firmas de legisladores públicamente adherentes a la consulta e incluso de miembros de la Comisión nacional que la organiza. Desde la oposición parten airadas acusaciones en el sentido de que la Corte es "manejada por el gobierno para impedir el referéndum" y se menciona con preocupación la dramática disminución de las firmas reconocidas como válidas. En el lento y polémico trámite, el organismo dependiente del Poder Judicial —con mayoría de miembros representantes del gobierno— ha descartado por diferencias mínimas en el tamaño de una letra, el largo de la barra de una "t" o el punto de la "i", miles de adhesiones. La firma de un ciudadano de 80 años para ser aceptada, tendrá que ser idéntica a la de sus 18, cuando sacó la credencial cívica con la que se la compara. "Se está violando la voluntad popular, basta de manejos, a votar", fue la consigna de una caravana multitudinaria que recorrió Montevideo el sábado 24, exigiendo la realización del referéndum. Como verdad de Perogrullo en el Uruguay se suele decir que allí una muerte vale, y que sobre las víctimas no se puede pasar arrancando las hojas del almanaque.

Fue así como bajo el liderazgo de las viudas de los legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz —ambos asesinados en Buenos Aires— se plegó buena parte del espectro político del país: el Frente Amplio, el Movimiento de Rocha del Partido Nacional, la Unión Blanca Popular, el Movimiento de Reafirmación Batllista (colorado), el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y otras agrupaciones de izquierda que están fuera de la coalición frenteamplista. Apoyaron asimismo la convocatoria la central única de trabajadores PIT-CNT y múltiples organizaciones sociales que van desde las cooperativas de viviendas y organizaciones barriales, hasta el pronunciamiento a favor de la cúpula religiosa empujada por el pronunciamiento de sus bases.

La maratónica campaña para conseguir las firmas contó con el apoyo de figuras tan reconocibles como el actor cómico Ricardo Espalter, escritores como Eduardo Galeano o Mario Benedetti, los músicos Alfredo Zitarrosa o Daniel Viglietti o los goleadores de fútbol Fernando Morena y Enzo Francescoli quienes entre muchísimos otros, desfilaron frente a las cámaras o puerta a puerta reclamando una firma por la justicia. A esta altura, sin embargo, ya es evidente que el cotejo de las firmas con las hojas electorales no podrá completarse este año como estaba previsto. Quedará entonces para dirimirse en el año electoral como abiertamente lo había proclamado el gobierno a través de sus funcionarios. La simultaneidad del voto del referéndum con las elecciones presidenciales sería una estrategia viable para volver al redil a miles de ciudadanos de los partidos tradicionales, que contra la opinión de sus líderes han firmado por el referéndum. El voto simultáneo —conjeturan— volvería a "disciplinar" a las bases que en cuestión de política de derechos humanos optaron por despegarse del encuadre partidario.

En el camino quedan aún complejas instancias a dirimirse como las sanciones impuestas por el ministro de Defensa a los militares que adhirieron a la consulta. El general (R) Hugo Medina —ex integrante de la dictadura—, además de adelantar públicamente que las fuerzas armadas pueden llegar a desconocer el veredicto popular, ha sancionado y abierto sumarios a los militares y policías que firmaron por el referéndum. Por otra parte, una veintena de legisladores discuten la posibilidad de iniciar un juicio político a la Corte por la parcialidad demostrada, y pende el riesgo de que la Comisión desconozca su fallo. El equilibrio de los tres poderes aparece lesionado con una corte electoral bajo las sombras de la sospecha.

Si el referéndum se hiciera en noviembre próximo junto a las elecciones nacionales, pesará sobre el mismo la gravitación de un doble plazo. Para los militares será posiblemente la anulación de la ley de impunidad, que pomposamente fue bautizada con el nombre de Ley de Caducidad de la Petención Punitiva del Estado, defendida a rajatabla por el Partido Colorado; a su vez para éste será la terminación del período de gobierno con una deuda que deberá asumir el hombre que suceda a Sanguinetti en la casa de El Prado.

...tras perdidas

...bieron autores nacionales o extranjeros. Todo su empeño docente estuvo centrado en implantar una disciplina militar en los liceos y escuelas; en cortar cabellos, ya que cortar cabezas de adolescentes no iba a ser bien visto por la comunidad internacional, y en prohibir a las jovencitas que usaran ropas que pudieran realzar sus atributos físicos.

Hoy se pueden medir las consecuencias de esta combinación de oscurantismo y deliberada intención de cortar a los jóvenes el cordón umbilical con la historia, la propia y la del mundo, como una forma de desconectarlos del futuro. Los profesores que retornaron a sus cargos después de la dictadura se encuentran con una ignorancia sorprendente, aun en alumnos de ciclos superiores. Autores nacionales o extranjeros conocidos internacionalmente, nada dicen a los actuales estudiantes. Desde un punto de vista cultural, es válido hablar de una generación perdida.

Adquirir un libro es prohibitivo para el uruguayo medio, y el servicio de bibliotecas públicas es prácticamente inexistente. Los diarios han pasado a ser un artículo de lujo en un país en el que pocas familias dejaban de recibirlo cada día y que tenía uno de los más altos índices de lectura del mundo. Ahora se compran sólo los domingos, y las tiradas de los de mayor circulación, que eran de unos 80.000 a 100.000 ejemplares, ya no llegan a 20.000. Una media docena de semanarios de diversas tendencias se publican con normalidad y tienen un público estable. El costo de un diario es actualmente de unos 300 pesos, pero el salario promedio está por debajo de 50.000 pesos, que es lo que cuesta el alquiler mensual de un modesto apartamento.

LIBER SEREGNI

"EL FRENTE AMPLIO PUEDE TENER EL GOBIERNO DE MONTEVIDEO"

El presidente del Frente Amplio, general Líber Seregni, asegura que el referéndum para derogar la ley se realizará. En una entrevista con Hernán Dinamarca, habló sobre las diferencias en el interior del Frente, que atribuyó a una lucha por la hegemonía en los comités de base.

El Frente Amplio (FA) vive una difícil situación, marcada incluso por la amenaza de fractura. ¿Cuáles son las diferencias que han llevado a que el Partido por el Gobierno del Pueblo y la Democracia Cristiana aparezcan enfrentados?

—La diferencia tiene que ver con la concepción que se tenga del frente: es sólo una coalición de partidos, tipo confederación, o debe primar su carácter movimientista. De cualquier manera, luego de un período singularmente tenso, el acuerdo político logrado recientemente llevó a un clima de distensión, apronttándonos ahora a discutir nuestras diferencias con el ánimo de sobrepasarlas.

—¿Cuáles serían las razones políticas que llevan al PGP y al PDC a plantearse el carácter coalicionista del FA?

—Desde un principio el FA constituyó los comités de base, que son células del frente donde coexisten ciudadanos de distintos partidos e independientes que van a discutir las formas de acción, y esto genera un carácter movimientista. Esa es la realidad que hay que vivir. ¿Qué pasó? Desde el momento en que se le dio a los comités de base una cuota de participación y poder, hubo en éstos una lucha por la hegemonía en su interior. Esto provocó mayor militancia de algunos grupos, y retiro de la militancia de otros, llegándose a una situación de inconformismo para aquellos partidos, específicamente el PGP, que no se caracterizan por fuerza militante, sino por expresar corrientes de opinión.

—Pero no habría diferencias programáticas.

—Hay acuerdo en el programa en construir una democracia avanzada. Hoy nos vemos obligados a una puesta a punto de las ideas que 17 años atrás primaron para el establecimiento del frente.

—Es decir, ni coalición ni movimiento. Sin embargo, el problema es de fondo, ya que al no construirlo como movimiento, entendiendo a los comités de base como espacios educativos y organizadores de la población para el ejercicio del poder, se está ante una estrategia meramente electoral.

—El comité de base es centro de trabajo y germinación de las ideas del FA, de inserción en los barrios. Es fuente de poder para ejercer el gobierno. Pero el problema no es tan de fondo, pues en la medida en que se comprenda que el FA no puede ser una coalición pura, porque existe una realidad que son los comités de base, ni tampoco movimiento puro porque debemos asegurar el más absoluto respeto por la autonomía y perfil de los partidos integrantes, y que el conjunto del frente se mueva sin ningún tipo de avasallamientos, ahí está la resolución del problema.

—En un discurso reciente usted dijo que hay sectores consecuentemente democráticos más allá del FA.

—La división que tracé es una gran contradicción en nuestras sociedades entre fuerzas conservadoras y fuerzas progresivas y renovadoras. En ese marco, no sólo el FA es transformador, sino que existen también en el seno de los partidos tradicionales fuerzas que lo son y nuestra estrategia es buscar los acuerdos programáticos con esos sectores. El gran punto de división es la política económica y social que impulsa el gobierno, neoliberal, y nosotros y gente de los partidos Blanco y Colorado entendemos que ella no sirve a los países subdesarrollados y dependientes. También tenemos coincidencias en un tema tan importante como el de los derechos humanos. Por ejemplo, con el referéndum para anular la ley de caducidad, la política del FA ha fisurado a los partidos tradicionales.

—Usted calificó la política de Sanguinetti como antinacional, antidemocrática y antipopular. Con los mismos adjetivos se trata al gobierno de Pinochet.

—Todas las adjetivaciones en el terreno político no son trasladables de un país a otro, y tienen relación con el momento que vivan. Decimos políticas antinacionales porque no responden al interés del país: cuando acá las normas económicas son dictadas por el FMI, ellas no obedecen a finalidades nacionales. Cuando el gobierno hace uso y abuso de la política de veto e impone su voluntad minoritaria sobre la voluntad de la mayoría, no es democrático, porque la democracia es el imperio de la mayoría. Y cuando sigue una política salarial que está sujeta al pago de la deuda externa y otros indicadores, no responde a los intereses populares y, por tanto, es antipopular. Y esto no significa que yo diga que el presidente, ni el gobierno, ni el Partido Colorado sean todos esos antis, pero sí las prácticas que tienen esa significación.

—El hecho de ocupar el Ministerio de Defensa un teniente general (R), Hugo Medina, comprometido con la dictadura como su último comandante en jefe, hace que algunos hablen de un pacto cívico-militar. Más aún, agregan que ésta es una democracia tutelada. Recientemente, un destacado sociólogo indicó que las Fuerzas Armadas difícilmente dejarían al FA ejercer el mandato popular en la eventualidad de que alcanzara la intendencia de Montevideo en 1989.

—Esa es una opinión. No es ésta una democracia tutelada. Sí hay un entendimiento entre el gobierno y los militares que conviene al orden futuro que proyecta el Partido Colorado. Desde el punto de vista institucional-jurídico vivimos en democracia. Desde el punto de vista real, como el proceso se hizo sobre la base de una negociación y las Fuerzas Armadas se retiraron intactas a sus cuarteles, sin resolverse los juicios a las violaciones a los derechos humanos, ellas no se han integrado totalmente a la sociedad y constituyen una presencia potencial.

"La afirmación del sociólogo no la creo, no la tomo en cuenta. Y digo: el FA tiene serias posibilidades de alcanzar el gobierno de Montevideo y va a ejercerlo."

—Para las Fuerzas Armadas será difícil enfrentar el referéndum, en caso de realizarse. ¿El FA cree en la posibilidad de justicia efectiva, sabiendo que ésta depende de una correlación de fuerza real, o se trataría en su momento de negociar un mayor control civil sobre lo militar, evitando la confrontación?

—Acá, dos cosas. Primero, referéndum va a haber. Segundo, no se habla de confrontación sino de hacer cumplir la ley. Incluso en el año 1986 habíamos avanzado sensiblemente en un quehacer político común, negociándose en el buen sentido del término. Habíamos propuesto que estas causas fueran examinadas a nivel de la más alta magistratura. Ahora hay que tener presente que el tiempo pasó, y como a consecuencia de nuestra legislación hay una gran cantidad de delitos que han caducado, sólo son punibles los delitos muy agravados, como el rapto y desaparición de personas.

—Usé la palabra confrontación porque de hecho, días antes de la promulgación de la ley de caducidad, el comandante en jefe del Ejército guardó las citaciones judiciales en su caja fuerte.

—Si el ciento por ciento de la ciudadanía votara la anulación, la relación de fuerza, no de fuerza física, supondría que las Fuerzas Armadas no podrían evitarlo. Ahora vamos a terminar con el conteo de firmas, vamos a ir al referéndum, y no es aventurerismo, no es tirarnos al vacío, sino que estamos decididos a recorrer un camino y a no ponernos vallas a priori, eso para mí es inaceptable.

